

LOS CRISTIANOS Y LAS LEYES INJUSTAS

AUGUSTO SARMIENTO

El cristiano, hijo de Dios y de la Iglesia, es a la vez miembro de la sociedad en que vive, verdadero hombre de su tiempo. Y una y otra condición —tenerlas siempre presentes en la diaria actividad— son, para él, de la mayor importancia: de ellas, en efecto, de vivir ordenadamente las exigencias morales que comportan, dependen, entre otras cosas, la coherencia y autenticidad de su vida cristiana¹. No se trata, sin embargo, de una tarea fácil, ya que le acechan constantemente dos extremismos igualmente erróneos —“el alejamiento de las cosas temporales” y “la dedicación total a las mismas, como si fueran realidades enteramente ajenas a la vida religiosa”—, que terminan siempre en “el divorcio entre la fe y la vida”².

Pero es claro que no puede haber contradicción alguna en los comportamientos morales exigidos al cristiano por esa doble condición —la de ciudadano y la de miembro de la Iglesia—; no tiene sentido hablar de oposición entre sus deberes profesionales y sociales por un lado, y los religiosos y de creyente por otro. Hasta el punto de que si algunas veces se presentara esa incompatibilidad, ésta sería sólo aparente: todos los deberes y obligaciones si lo son de verdad, por proceder —en última instancia— de Dios, son siempre coherentes y jamás pueden encerrar una verdadera contradicción³. El cristiano, que por la condición

1. Cfr. CONC. VAT. II, *Gaudium et spes*, n. 43.

2. Cfr. *Ibid.*

3. Cfr. CONC. VAT. I, *De fide catholica*, c. 4 (DZ. 1875-1786); cfr. CONC. VAT. II, *Gaudium et spes*, nn. 36, 43.

de criatura está ya ordenado a Dios, al ser elevado por la gracia al orden sobrenatural recibe una nueva forma de relación con Dios —la filiación— que asume aquella primera, de criatura, elevándola a una perfección infinitamente superior: la intimidad con Dios Trino. El hombre, pues, que se hace cristiano sigue siendo, en lo natural, enteramente igual a los demás, al recibir el bautismo no pasa a ser una nueva persona: es el mismo, pero elevado a un fin, y llamado a una vocación más alta y superior —esencialmente más alta y superior por ser sobrenatural—, que, al mismo tiempo, en nada merma o disminuye aquella primera y radical, propia de la criatura. El cristiano, pues, lejos de abandonar los deberes ciudadanos y los quehaceres temporales —como si éstos le apartaran o distrajeran de su vocación— encuentra en ellos la manera de seguirla, la materia misma de su amor a Dios y a los hombres⁴. Si quiere actuar en conformidad con la vocación recibida —al estilo de Cristo— ha de amar a la sociedad, al mundo; y amarlos apasionadamente⁵.

No existe problema alguno para ello —aparte de las dificultades inherentes a la práctica de la vida moral—, cuando la sociedad está regulada por leyes justas. El cristiano, entonces, al desempeñar, por ejemplo, su profesión de acuerdo con esas leyes, actúa por lo mismo —y en ese punto— según las leyes divinas. El problema y las dificultades sobrevienen en el caso de las leyes injustas: ¿cómo proceder a fin de que la actuación sea moralmente correcta, es decir, de verdadero cristiano y, por tanto, auténticamente humana? La solución acertada a estos interrogantes —no pocas veces planteados a la conciencia cristiana— debe tener en cuenta, en primer lugar, la condición de las leyes injustas; y esta es la razón de por qué analizamos las relaciones de las leyes humanas con la ley natural. En segundo lugar es necesario considerar la situación de privilegio que el cristiano, gracias a la fe, tiene respecto de la ley natural; de ahí, precisamente, arranca su obligación mayor de actuar: en concreto, cuando se conculca la necesaria relación de las leyes humanas con la ley natural.

4. Cfr. CONC. VAT. II, *Lumen gentium*, n. 41; *Gaudium et spes*, n. 43.

5. Cfr. J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, *Amar al mundo apasionadamente*, en *Conversaciones con Monseñor Escrivá de Balaguer*, Madrid 1975, nn. 112-118.

I. LAS LEYES HUMANAS Y LA LEY NATURAL

1. *La ley natural, fundamento de las leyes humanas*

Para que una ley humana sea justa⁶ —sea ley— debe *de alguna manera* reducirse a la ley natural⁷: porque consigne la misma ley natural, o porque establezca lo que ésta dictamine en la mayoría de los casos, o porque determine lo que es conveniente observar según las circunstancias excepcionales, y “así todas las leyes positivas se reducen a la ley natural, no absolutamente por sí mismas, sino consideradas las diversas circunstancias que hacen conveniente su observancia”⁸.

No es suficiente con que el legislador promulgue una ley para que —sin más— lo sea en sentido verdadero, es decir, obligue en conciencia. Ello es verdad únicamente en el caso del Legislador Supremo: Dios, que es la Sabiduría y Bondad infinitas, nada puede hacer y querer que no sea bueno y santo; y así las leyes divinas son buenas y justas siempre. Pero no ocurre lo mismo con los hombres, con los legisladores humanos, precisamente por su condición de criaturas; su inteligencia y voluntad no “hacen” ni la verdad ni el bien⁹, son esencialmente limitadas y, por tanto, defectibles¹⁰, constantemente sometidas al riesgo de errar. (Inclu-

6. El tratamiento completo de las leyes injustas debe tener presente el marco más amplio de la ley humana: posibilidad, necesidad, obligatoriedad, etc. Ofrecemos, por conceptos, los lugares más relevantes en que Santo Tomás estudia la ley humana: a) *Existencia* (*S. Th.*, I-II, q. 91, a. 3; *In X Ethic.*, lect. 14; *C. G.*, III, c. 123; *In IV Sent.* d. 15, q. 3, a. 1, ql. 4; a. 2, ql. 1; *In V Ethic.*, lect. 12). b) *Naturaleza* (*S. Th.*, I-II, qq. 95-97; *In III Sent.*, d. 37, q. 3; *C. G.*, III, c. 123). c) *Obligatoriedad* (*S. Th.*, I-II, q. 96; *In V Ethic.*, lect. 16). d) *Prohibición* solamente de los vicios que afectan a la vida social (*S. Th.*, II-II, q. 10, a. 11; q. 69, a. 2). e) *Distinción entre aprobación y sanción* (*De Malo*, q. 13, a. 4 ad 6; *S. Th.*, I-II, q. 93, a. 3 ad 3). f) *Forma de conocer las leyes justas*: “ex fine”, “ex auctore”, “ex forma” (*S. Th.*, I-II, q. 96, a. 4). Desde el punto de vista metafísico puede consultarse a: O. N. DERISI, *Los fundamentos metafísicos del orden moral*, Madrid 1969, pp. 404-410; y en relación con la fundamentación moral del derecho: A. DEL PORTILLO, *Moral y Derecho*, en “Persona y Derecho” 1 (1974) pp. 493-501.

7. Cfr. *In III Sent.*, d. 53, q. 1, a. 3.

8. *In III Sent.*, d. 37, q. 1, a. 3, sol. —R. GARCÍA DE HARO (*La noción teológica de la ley natural*, en VV. AA., *Veritas et Sapientia*, Pamplona 1975, pp. 251-275) hace un sugerente y profundo estudio de la ley natural en el que contempla también las relaciones de la misma con las leyes humanas.

9. Cfr. *S. Th.*, I, q. 16, a. 1.

10. Cfr. O. N. DERISI, o. c., pp. 159-162; Cfr. *De Malo*, q. 16, a. 5 c.

so aunque no procedan con mala voluntad). Se hace necesario pues, en última instancia, recurrir a un criterio distinto y superior a la misma ley humana: la relación de conformidad —o al menos de no oposición— con la ordenación de la ley natural.

Se comprende bien —siempre que no se niegue la existencia de Dios— la presencia de esa ordenación de la ley natural en las criaturas: una ordenación que es finalización hacia el mismo Dios. Las criaturas —incluido por consiguiente el hombre— por lo mismo que no han recibido de sí mismas el ser ni de ningún otro ser sino de Dios, tampoco han recibido el fin, la ordenación final más que de Dios. Y como Dios, por serlo, obra siempre ordenadamente, en su operación no puede tener otro fin más que El mismo: todas las cosas, pues, han sido creadas por y para Dios, para manifestar y dar gloria a Dios. Es la consecuencia primera y más radical de la creación.

Seguir esa ordenación es, por tanto, el modo de manifestar y dar gloria a Dios. Y dado que éste es el fin de las criaturas, se concluye que éstas sólo por este camino encuentran o “realizan” lo que son —su ser—: únicamente en la medida que lo siguen son más ellas mismas. No todas las cosas, sin embargo, están situadas de idéntica forma ante esa ordenación de Dios; o con otras palabras, Dios ha hecho, a las criaturas, partícipes de esa finalización de maneras diversas, siempre de acuerdo con la naturaleza propia de cada una. Así, en los hombres, esa ordenación, siendo eficaz y obligatoria, siempre es compatible con la libertad: como criaturas —en la misma línea que los demás seres creados— la poseen impresa y como grabada en sí mismos, donada por el mismo Dios en la misma creación; hasta el punto de que se puede decir con toda verdad que, entre todas las cosas, lo más íntimo del hombre es esa ordenación o proyecto divino. Pero el hombre, como ser dotado de espíritu, puede además —a diferencia de los demás seres de la creación visible— conocer y amar esa ordenación, darse cuenta de su condición creatural y querer actuar en conformidad con ella: seguirla libremente y no tan sólo ser conducido. Se deduce de aquí que lo que hace que la actividad humana dé o no gloria a Dios —sea buena o mala, lleve o aparte del fin—, es el seguimiento o desprecio de esa ordenación final o plan de Dios; es decir, que la moralidad de las acciones humanas depende, en definitiva y fundamentalmente, de la ordenación divina ¹¹: un plan o proyecto sobre la criatura racional que primero

11. Cfr. CONC. VAT. II, *Dignitatis humanae*, n. 3.

está en Dios, después en el ser del hombre y por último en su conocimiento¹².

Si nos referimos ahora a las leyes humanas es evidente —como consecuencia— que éstas nada pueden preceptuar contra la ley natural, expresión de ese orden y relación final¹³; y si lo hacen, no obligan. No puede, pues, decirse, respecto de ellas, que gozan de una autonomía absoluta, como si al legislador humano a la hora de dictar leyes le estuviera permitido desvincularse y no tener en cuenta el plan y ordenación divinos. Ciertamente existe una autonomía —justa autonomía— de leyes humanas; pero nunca frente al orden moral y en relación a Dios. Más aún: las leyes humanas sólo en el orden moral encuentran su auténtico valor y verdadera tutela¹⁴. Toda la actividad humana —hasta la que pudiera parecer más indiferente— si es verdaderamente humana, es por lo mismo moral y, en consecuencia, orientada y referida —positiva o negativamente, según los casos— a Dios, al Fin último. Si no lo fuera, debería concluirse que se dan actos humanos ajenos al designio divino; actos humanos que no son morales o que lo son por la sola referencia al hombre mismo, sin relación alguna a Dios. Sería, en última instancia, negarle al hombre su condición de criatura: o porque no se lo toma en serio o porque se le “hace” dios. Por esta razón, aunque una determinada ley humana, en unas circunstancias concretas, contemple una materia que parezca la más alejada de la ley natural, no —por eso— debe hacerse a espaldas o contrariamente a las exigencias de la ley natural¹⁵. En otro caso no sería más que represión y violencia y se destruiría automáticamente: no gozaría de ninguna validez ni produciría obligatoriedad moral alguna¹⁶. El hecho de que una materia no guarde, de por sí, una conexión necesaria con los contenidos de la ley natural, en manera alguna autoriza a determinar que sea neutra o amoral, y que sobre ella, por tanto, se pueda legislar sin obligación de observar ninguna referencia y relación a Dios.

El legislador humano interviene, unas veces, sobre contenidos de la ley divina, es decir promulga leyes cuyo objeto o materia consiste en lo que es bueno o malo de por sí o por disposición de

12. Cfr. CONC. VAT. II, *Gaudium et spes*, n. 47; cfr. S. CONG. PARA LA DOCT. DE LA FE, *Persona humana*, n. 3.

13. Cfr. *S. Th.*, I-II, q. 95, a. 3 c.

14. Cfr. CONC. VAT. II, *Apostolicam actuositatem*, n. 7; *Dignitatis humanae*, n. 3; JUAN PABLO II, *Redemptor hominis*, n. 17.

15. Cfr. *S. Th.*, I-II, q. 95, a. 2.

16. Cfr. *S. Th.*, I-II, q. 96, a. 4 ad 2; II-II, q. 60, a. 5, ad 1.

Dios (el bien divino); y, otras veces, lo hace en ese conjunto de materias dejado a la entera y libre disposición de los hombres (el bien humano) ¹⁷. Y es bien distinta la función que en uno y otro caso le corresponde: en el primero, sólo puede añadir la sanción conveniente, “porque así como la sociedad —y el legislador— no es origen de la naturaleza humana, de la misma manera tampoco lo es la concordancia del bien y de la discordancia del mal con la naturaleza” ¹⁸; en el segundo caso —sobre las restantes materias— puede legislar a condición de que en modo alguno contraría el orden moral resultante de la ley divina.

La ley humana —fuera de esto— no puede hacer más. No puede hacer que sea bueno lo que es malo, ni a la inversa, porque el orden divino es inmutable y, por tanto, no puede ser alterado por las decisiones humanas ¹⁹. No basta acudir a la autoridad del legislador como forma de “justificar” las leyes injustas, ya que es vana y sin sentido, desprovista de su fundamento, Dios ²⁰. Y menos todavía cabe el recurso a la acogida dispensada por los súbditos a las leyes como manera de hacerlas verdaderas y justas: por este camino a lo único que puede llegarse es a constatar el grado de aceptación que las leyes tienen; se registran hechos. Lo que, evidentemente, no quiere decir, en manera alguna, que ese precepto —en la hipótesis de que una parte de la sociedad o “la mayoría” no lo acepte— no exista o que deje de ser culpable su transgresión ²¹.

Sería bastante aleccionador presentar un análisis de las “razones” y “argumentos” —política de los hechos consumados, respecto a la opinión pública, a las conciencias...— con los que se pretende pervertir y hasta romper esa necesaria relación de las leyes humanas con el orden moral, con la ley natural; y, en consecuencia, dar carta de ciudadanía a leyes que no pueden serlo por ser injustas. Esta consideración sobrepasa con creces los límites de estas páginas; no obstante, y sólo a título de ejemplo, vamos a fijarnos en uno de los principios más frecuentemente invocados como motivo de “justificación” de las leyes injustas: la convivencia pacífica. En virtud de este principio —se sostiene por algunos— pueden tenerse como buenas y justas incluso aquellas

17. Cfr. *S. Th.*, I-II, q. 96, a. 4 c.

18. LEÓN XIII, *Libertas praestantissimum*, en *Leonis XIII Acta*, 8, p. 220.

19. Cfr. *S. Th.*, II-II, q. 60, a. 5 c.

20. Cfr. *S. Th.*, I-II, q. 95, a. 2; JUAN XXIII, *Pacem in terris*, en AAS 55 (1963) pp. 269 ss.; Pío XII, *Summi Pontificatus*, en AAS 35 (1939) p. 440 ss.

21. Cfr. S. CONG. PARA LA DOCT. DE LA FE, *Persona humana*, n. 9.

leyes que contrarían los valores y derechos fundamentales protegidos por la ley natural, a condición de que se les respete en la esfera de la conciencia privada y se pueda, de paso, establecer un modo pacífico de convivencia, dado que así lo estima la mayoría.

Conocida es la clásica definición de ley como "ordenación de la razón para el bien común, promulgada por quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad, o sociedad"²². Se deduce de ahí que la ley no puede tener otro fin que el bien de los miembros de la sociedad a los que va dirigida; no de un individuo particular ni de un determinado grupo tan solo, sino de toda la sociedad²³: la ley ha de buscar el bien común. La dificultad, sin embargo, viene a la hora de precisar el concepto de bien común; y todavía es mayor cuando se trata de delimitar los caminos para conseguirlo.

A nivel práctico, al menos, se hacen a veces coincidentes bien común y convivencia pacífica. Sería suficiente con que una ley sirviera para que todos los miembros de una sociedad, o la mayor parte, convivieran pacíficamente, para que ya, por ello, esa ley estuviera dirigida al bien común; independientemente de que la armonía y el común acuerdo se redujeran sólo a lo práctico, a lo relativo a los medios y técnicas de solución de los problemas planteados. El bien común —en esa concepción— se conseguiría, aunque los principios morales básicos quedaran relegados al ámbito privado de la conciencia, y aunque hubiese que dar una legislación en contradicción con la ley natural. ¡No sólo no sería ilícito promulgar esas leyes injustas, sino que constituiría un deber!

Pero bien común no es igual a convivencia pacífica. Primero, porque una cosa es que los ciudadanos, los miembros de la sociedad, *puedan* vivir pacíficamente; y otra muy distinta es que de hecho lo hagan —esto es exigencia de la justicia social—. Además la convivencia pacífica es una parte del bien común, una consecuencia del mismo. El bien común incluye, ciertamente, entre sus elementos la paz o la concordia de las personas que integran la sociedad o comunidad; hasta el punto de que ella —la paz— realiza lo más propio y específico del bien común de esa sociedad en cuanto tal. Pero no debe entenderse cualquier forma de paz y convivencia —no todo tipo de convivencia garantiza el bien común—; se trata sólo de aquellas formas de convivencia que son

22. S. Th., I-II, q. 90, a. 4.

23. Cfr. S. Th., I-II, q. 90, a. 2.

ordenadas, con orden²⁴: las que nacen y se apoyan en la justicia²⁵, y que, por tanto, reconocen los valores y dimensiones fundamentales de la sociedad y las personas que la forman.

El bien común, pues, tanto en el sentido ontológico como en el social se relaciona necesariamente con Dios, el Bien Supremo. Y no sólo porque de El derivan, en definitiva, todos los bienes, sino porque también hacia El tienden. Por eso, el bien común, tomado en su acepción social —como ahora nos interesa—, debe apuntar siempre y en último término a Dios, dirigiendo a El de una u otra manera la comunidad o sociedad de las personas. Se desprende de ahí que no es algo absoluto y cerrado en sí mismo: el bien común en efecto ni se entiende ni puede explicarse satisfactoriamente sin esa necesaria y esencial referencia a Dios y a los hombres²⁶, siendo lo primero —la relación a Dios— la mejor garantía —la única— de tomarse en serio, verdaderamente en serio, a los hombres y a la dignidad humana.

Está, por otra parte, fuera de lugar hablar de oposición —de verdadera oposición— entre bien común y bienes particulares. Existe entre ellos, eso sí, una jerarquía y subordinación²⁷, una mutua interdependencia y correlación. Pero nunca, por ejemplo, puede darse contradicción entre bien común y dignidad de la persona humana: estos dos bienes tan mutuamente se exigen entre sí y de manera tan esencial que, si una convivencia determinada —para poder serlo— llevara a conculcar o necesitase el precio de valores tan fundamentales como el derecho a la vida, la libertad de enseñanza, etc., no sólo no se respetaría la dignidad humana de las personas, sino que tampoco quedaría a salvo el bien común; aunque aparentemente pudiera encubrirse con una pretendida convivencia pacífica. Y es que esos valores fundamentales son precisamente el bien común. Un bien que —digámoslo de nuevo— lo es, antes que nada, por su relación —de origen y destino— a Dios, Bien Supremo; y derivadamente y por el mismo motivo, con los hombres, con la dignidad fundamental de la persona humana. Y, en consecuencia, las leyes que de una u otra manera atenten contra esas relaciones son contrarias al bien común y, en cualquier hipótesis, injustas.

24. Cfr. *S. Th.*, II-II, q. 29, a. 3 ad 1.

25. Cfr. *S. Th.*, II-II, q. 58, a. 6; q. 61, a. 1.

26. Cfr. S. RAMÍREZ, *La doctrina política de Santo Tomás*, Madrid s.a., pp. 35-36.

27. Cfr. S. TOMÁS, *In I Ethic.*, lect. 2.

Son bien distintas, pues, la nociones de bien común y convivencia pacífica; y mal puede, por otro lado, recurrirse al bien común como manera de hacer válida una ley injusta.

2. *El conocimiento de la ley natural*

Las leyes humanas tienen su fundamento válido en el orden moral y guardan por consiguiente —tal como acabamos de ver— una relación necesaria y esencial con la ley natural: de ella, de la conformidad o por lo menos no contrariedad con la ley natural depende, en efecto, que las leyes humanas lo sean o no²⁸. Pero ¿los hombres pueden tener conocimiento verdadero, hacerse una idea exacta de las exigencias de la ley natural, que de una u otra manera deben tener siempre presentes las leyes humanas? El problema se pone tanto por parte del legislador como por la de los súbditos: aquél, para legislar con rectitud; éstos, para saber, en momentos determinados, a qué atenerse.

Por ello es necesario dejar bien claro, si bien son dos cosas diferentes, que el hombre, no sólo puede conocer la ley natural, sino que también puede hacer un uso recto de ese conocimiento; es decir, es capaz, por un lado, de conocer la ley natural —al menos en sus exigencias más primeras y fundamentales—, y por otro, de seguirla y ordenar la propia vida de acuerdo con esas exigencias. Y la argumentación es fácil de comprender. Porque, como es obvio, si ello no fuera posible, habría que concluir que Dios no habría capacitado suficientemente a los hombres en orden a alcanzar su fin: la ley natural, en efecto, —a nivel ontológico— no es otra cosa que la ordenación final participada por Dios a la criatura, al ser creada: y, a nivel moral, es la participación racional, mediante la luz de la razón, de esa misma ordenación, gracias a la cual la criatura libre conoce y hace²⁹ lo que en orden al fin es bueno y debe hacer, y lo que es malo y tiene que evitar³⁰; y habría que afirmar entonces que Dios, dador de esa ley natural, sería el solo responsable de esa no consecución del fin —mejor, imposibilidad—, y que el hombre no sería verdaderamente libre. Por otra parte el pecado no ha dañado tanto al hombre que éste —en su inteligencia y voluntad— se encuentre ya radical y esen-

23. De hecho, sin embargo, sólo existe un único último fin, el sobrenatural, que mantiene íntegras todas las exigencias del fin natural, si bien elevadas.

29. Cfr. los apartados *La ley natural como luz* y *La ley natural como inclinación a la virtud*, en R. GARCÍA DE HARO, o. c., pp. 258-262.

30. Cfr. *S. Th.*, I-II, q. 91, a. 2 c.

cialmente incapacitado para conocer y seguir las exigencias de la verdad y de la ley natural³¹.

Por otra parte la Revelación enseña que la verdad objetiva es accesible al conocimiento humano, no limitándose éste a aceptar tan sólo lo fenoménico³². Aunque es indudable que en ese conocer están siempre presentes las características subjetivas y los condicionamientos históricos que acompañan inevitablemente al sujeto cognoscente, está también fuera de duda que el conocimiento humano trasciende el mero devenir histórico y alcanza unos principios inmutables en su núcleo esencial: "más allá de toda convención de grupo, de toda estimación mayoritaria, de todo orden socialmente reconocido de valores, hay algo mucho más importante, a saber: una verdad natural —con gusto diría una verdad verdadera—, una verdad que se hace patente a la razón, una verdad objetiva"³³. Y dentro de esa verdad objetiva va comprendida la verdad moral, los principios morales más fundamentales de la ley natural³⁴.

Este conocimiento de las verdades morales encuentra a veces no pocas dificultades, ocasionadas particularmente por las conductas de las mismas personas. Cuando, en efecto, se trata de este tipo de verdades, dado que su descubrimiento comporta unas exigencias morales y prácticas que no pocas veces piden cambios profundos y maneras de ordenar la vida de forma totalmente distinta a como se venía haciendo, fácilmente se persuade uno de que es bueno lo que no cuesta y malo lo contrario. Por eso se da, en ocasiones, un obscurecimiento de la ley natural, al que aparece estrechamente vinculada su negación. Y es que la unidad del alma humana y la estrechísima unión de ésta con el cuerpo —con la consiguiente complementariedad e interdependencia de sus potencias al obrar—, lleva, tal como la experiencia demuestra abier-

31. Cfr. las condenas del Magisterio de la Iglesia de la posición luterana sobre la corrupción esencial de la naturaleza humana.

32. Cfr. CONC. VAT. II, *Gaudium et spes*, n. 15.

33. J. M.^a MARTÍNEZ DORAL, *¿Hay una verdad incondicional acerca del hombre?*, en "Persona y Derecho", 3 (1976) pp. 5-6.

34. Cfr. Pío XII, *Humani generis*, en *Denz.-Sch.*, n. 3875. Dos errores existen fundamentalmente contra la posibilidad de conocer la verdad por parte de la inteligencia humana: a) el *exagerado criticismo* que hace del propio juicio la medida de la verdad: supone una confianza tan desmedida en las fuerzas de la razón que llega a afirmar que puede "hacer" la verdad y no sólo conocerla y descubrirla. b) El *pesimismo* según el cual la razón humana quedó tan herida y dañada por el pecado, que ya nada puede conocer más que lo fenoménico, las apariencias de las cosas.

tamente, a conformar la propia actividad y vida moral con los criterios rectos del obrar o, por el contrario, a deformar esos principios en dependencia con la vida moral depravada. ¡Es una ley psicológica!

Pero son, evidentemente, dos realidades enteramente distintas. El hombre puede obscurecer la ley natural, puede no seguirla, haciendo un uso malo de su libertad; pero, como ya advertíamos, ello no equivale a decir que la ley natural no exista, ni, mucho menos, que ese incumplimiento o transgresión no sea culpable.

II. ACTUACION DE LOS CRISTIANOS ANTE LAS LEYES INJUSTAS

1. *Deber de los cristianos*

El cristiano no se encuentra ante la ley natural en la misma situación que los demás hombres: cuenta en orden a conocerla, además de las fuerzas naturales, con la luz que le proporciona la fe sobrenatural. Esta, es cierto, le posibilita el acceso a realidades de orden estrictamente sobrenatural; pero no sólo eso: la fe también ilumina la razón y la preserva de tal manera de los errores, que puede con seguridad y prontitud llegar a las mismas verdades de orden natural, a las verdades morales³⁵. Por otra parte, la gracia le proporciona la necesaria rectitud a la voluntad de forma que pueda ya de manera perfecta dirigirse al último Fin; la gracia que sana y perfecciona la naturaleza, sana la voluntad de las heridas del pecado original, capacitándola para obrar en plenitud y con perfección en el camino del Bien. De hecho —como apuntábamos anteriormente— toda la moral natural ha quedado asumida en la sobrenatural; y no existe, por tanto, más que un orden de moralidad que vige siempre y en todas partes, aunque de manera y grado diverso, ya que no a todos los hombres ha llegado la predicación de Jesucristo. En consecuencia, la ley cristiana es la única que expresa lo que es la situación real del hombre, llamado a la unión sobrenatural con Dios; las afirmaciones sobre moral, de los filósofos y religiones no cristianas, que incluyen aspectos verdaderos, sólo en el cristianismo encuentran su razón

35. Cfr. CONC. VAT. I, *Dei Filius*, c. 2, en *Denz. Sch.*, n. 3005.

plena, al purificarlos de los errores y situarlos en relación al fin que les da todo su sentido³⁶

El cristiano tiene, pues, por medio de la Revelación, la completa seguridad de poseer la verdad, de conocer la ley natural y las exigencias morales que de ella derivan. Una seguridad —infalibilidad— que le viene no de motivos humanos, sino del mismo Dios, a través del Magisterio de la Iglesia, único intérprete auténtico e infalible de la Revelación, y por ello, de los contenidos de la ley natural³⁷.

Aquí radica —entre otras razones— la especial responsabilidad, el grave deber, que los cristianos tienen a la hora de vivir las exigencias de la ley natural. Porque, como la experiencia atestigua, cuando se trata de verdades morales, las dificultades que en su conocimiento y posterior aplicación práctica se pueden encontrar, se ven notablemente aminoradas si se contemplan hechas vida. De esta manera, gracias al ejemplo, se penetra como por connaturalidad en el verdadero sentido de la ley natural: el camino necesario para llegar a Dios y a los demás hombres —amor de Dios y apostolado—, de la auténtica y verdadera libertad³⁸.

Este deber de los cristianos —siempre grave— se hace especialmente urgente en algunas ocasiones, como son las leyes injustas; particularmente cuando se trata de leyes que contradicen la misma ley natural. Entonces el grito de que “es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres”³⁹ sigue estando vigente y conserva toda su actualidad aunque, de seguirle, se corra el riesgo de padecer males graves.

2. Manera de actuar

Siendo clara —en términos generales— la especial obligación que los cristianos— por la ayuda que la Revelación les presta— tienen de actuar frente a las leyes injustas, no lo es tanto, sin embargo, el modo concreto de poner en práctica esa obligación. Se trata, en efecto, de una cuestión, en la mayoría de los casos, compleja, que necesita ser suficientemente ponderada. Ahora nos limitamos a subrayar aquellos principios más fundamentales que han de informar de una u otra manera las actuaciones particulares y determinadas.

36. Cfr. JUAN PABLO II, *Redemptor hominis*, nn. 10, 11, 13.

37. Cfr. PABLO VI, *Humanae vitae*, n. 4.

38. Cfr. JUAN PABLO II, *Redemptor hominis*, n. 21.

39. Act. 5,29.

Lo primero, desde el punto de vista práctico y en orden a hacer realidad ese deber de actuar, es distinguir entre las diversas leyes injustas: las que lo son porque pretenden imponer una conducta pecaminosa, y las que son injustas por hacer sufrir una injusticia. La conducta práctica es muy distinta según se trate de una u otra hipótesis: mientras que en la primera se debe por todos los medios no sólo intentar cambiar la ley sino resistirla y nunca cumplirla, en la segunda puede *accidentalmente* —para evitar males mayores, por ejemplo— obligar su cumplimiento aunque exista al mismo tiempo el deber de buscar su derogación.

No es solución el no estar presente y huir de la sociedad ante las diversas injusticias que pudieran darse. De esa manera, con su huida, jamás cumpliría con el deber y obligación que tiene de actuar. El cristiano, si de veras quiere obrar como tal, ha de ser —sin perder su condición— uno más entre sus iguales los hombres, con el constante afán de “ganarlos a todos para Cristo”⁴⁰ y de “instaurar todas las cosas en Cristo”⁴¹. Por eso ha de estar presente, con una presencia activa, buscando por todos los caminos lícitos resistir a las leyes injustas hasta lograr que dejen de regir la sociedad: con campañas de prensa, y en general a través de los medios de comunicación social a su alcance, promoviendo los votos de la gente en la dirección de la justicia, con conversaciones, etc. Nunca pueden ser excusa o pretexto de pasividad slogans como “los demás son libres, que decidan por sí mismos”, “hay que respetar las conciencias”..., y otros similares ampliamente divulgados por la sociedad permisivista. Están en juego valores esenciales y objetivos —el honor de Dios y el bien de las almas— ¡los derechos fundamentales!, cuya salvaguarda compete a todos los hombres, precisamente como camino necesario para ir a Dios y respetar la misma dignidad humana.

Estimamos que la dificultad mayor, desde el plano personal, se le plantea al cristiano cuando su actuación se desarrolla en campos o actividades que tienen efectos o finalidades buenos y malos. Es el caso de la participación en agrupaciones o partidos políticos que en sus programas incluyen —junto con otras leyes justas— determinadas leyes que no lo son, porque contrarían, por ejemplo, determinaciones de la ley natural, como puede ser el derecho a la libertad de enseñanza. Si esas finalidades o efectos son separables —los buenos, de los malos— y cabe una partici-

40. Cfr. 1 Cor. 9,19.

41. Cfr. Eph. 1,10.

pación limitada sólo a los efectos buenos —las leyes justas—, alejados además el peligro próximo de consentir en la injusticia y el escándalo de los demás, no parece que se pueda prohibir la participación de los cristianos en esos grupos o partidos políticos; siempre que, por otra parte, el hecho de no participar o actuar en ellos no sea el camino mejor para lograr el fin que se intenta: la derogación de las leyes injustas. La presencia activa de los cristianos en la sociedad, los efectos buenos proporcionados que se buscan, y el hecho de que las consecuencias malas que se siguen tan sólo se toleren —nunca se quieran, ya que si hubiera otra posibilidad de actuar no se obraría de esa manera— nos parece que justifican esa participación. Se trata entonces, en efecto, de aplicar a la vida política los principios morales de las acciones de doble efecto, de la cooperación material y de la tolerancia.

No es igual el caso en el que las leyes justas e injustas son inseparables; es decir, cuando la participación, aunque en la intención se dirija solamente a las primeras, por la naturaleza de las cosas o la disposición de los hombres lleva consigo necesaria e inevitablemente la comisión de la injusticia —la contradicción de la ley natural—. Ahora, al cristiano sólo le cabe resistir y poner los medios para que cambien las leyes e inspiración de ese partido, por ejemplo, pero desde fuera de él, sin tomar parte activa en el mismo. Porque, de hacerlo, prestaría, con esa participación, una cooperación necesaria al mal, por muy buenos que fueran sus propósitos; por otro lado, difícilmente —por no decir que es imposible— evitaría el escándalo de los demás, y constantemente correría un peligro próximo de consentir en la injusticia. No cabe, por tanto, aplicar los principios morales de actuación correcta antes referidos, únicos que —a nuestro juicio— podrían hacer lícita la presencia de los cristianos en la hipótesis de que venimos hablando.

Sin entrar en más puntualizaciones —que, por otra parte, tanto han apasionado a los moralistas de todos los tiempos⁴²— digamos, por último, que para la derogación de las leyes injustas nunca puede recurrirse al uso de medios intrínsecamente malos. El fin, en efecto, por bueno que sea, nunca justifica la utilización de medios malos⁴³; y además se caería en la misma injusticia que se busca erradicar.

42. A este propósito son conocidos los temas de la licitud de la guerra, la muerte del tirano, etc.

43. Cfr. Rom. 3,8.